



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN  
SALA CIVIL

Medellín, catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2.024)

Ref.: Exp.: 05001 31 03 014 2021 00340 01

ACLARACION DEL VOTO

La institución de la cosa juzgada no se puede confundir con una prueba documental; ello sería equiparar, precisamente lo que constituye una Institución a un medio probatorio.

En un asunto como el que nos ocupa, siempre habrá que observarse el factor de imputación, por lo que no me parece ajustado al caso utilizar el ejemplo de la atención médica, pues en ello la correspondiente responsabilidad estriba en presupuestos axiológicos diferentes a los de la *lex aquilia*, con todas las presunciones que tiene esta última.

Ahora, de la cosa juzgada en el proceso civil que deviene de las decisiones penales, la doctrina ha sido clara en indicar:

*“La fuerza de cosa juzgada que se reconoce a ciertos pronunciamientos de los jueces penales en lo que concierne a la acción criminal, sobre el proceso civil indemnizatorio, no surge de la simple aplicación de los principios que*

*gobiernan el instituto de la cosa juzgada en materia civil, pues las diferencias que ontológicamente caracterizan la actividad jurisdiccional en uno y otro proceso, determinadas fundamentalmente por el bien jurídicamente tutelado, descartan la coincidencia de los elementos procesales en los cuales subyace el instituto mencionado.*

*“El fundamento de tal autoridad, como lo precisa la doctrina ‘... reside en un motivo de orden público sumamente simple. Los tribunales represivos, cuando resuelven la acción pública, fallan dentro de un interés social; no juzgan entre dos partes determinadas, sino entre una parte y la sociedad entera. Lo que deciden para fallar sobre la acción pública debe, pues, imponerse a todos. Nadie puede ser llevado a discutir las disposiciones penales de la sentencia, incluso en sus consecuencias sobre los intereses civiles. Por eso, la autoridad de la cosa juzgada en lo criminal es absoluta sobre lo civil; se impone sean cuales sean las partes, sean cuales sean el objeto y la causa de la demanda civil’ (Henri y León Mazeaud, André Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual, Tomo Segundo, Volumen II, pág. 354).*

*“Mientras que la sentencia condenatoria penal comporta un valor absoluto de cosa juzgada, la absolutoria o liberatoria de la responsabilidad penal del procesado, en cuanto a sus efectos en el campo civil, estaba sujeta a la reglamentación establecida por el art. 57 del C. de P. Penal, (hoy ídem artículo de la ley 599 de 2000), el cual consagraba que la acción civil no puede iniciarse ni proseguirse, cuando en providencia que haya adquirido firmeza, el reo ha sido eximido de responsabilidad penal, bien porque el hecho investigado no existió, ora porque el sindicado no lo cometió, u obró en legítima defensa o en estricto cumplimiento de un deber. De manera que al momento de decidir, dado el valor relativo que a la sentencia absolutoria le atribuye la ley, el juez civil debe verificar si el pronunciamiento del juez penal encaja en alguna de las hipótesis que taxativamente se consagran en dicho precepto, pues sólo en tales supuestos puede argüir su influjo sobre la acción civil (CSJ, SC del 12 de agosto de 2003, Rad. n.º 7346).” Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia SC3062-2018 1º de agosto de 2018.*

Entonces, como lo dijo esta Sala de Decisión en sentencia del 3 de octubre de 2022 (expediente 05001 31 03 016 2018 00489 01), *“... la institución de la cosa juzgada no busca supremacía de una especialidad sobre otra, sino que propende por la unidad y coherencia, entendiendo que la jurisdicción es una sola, pues la especialización es con en aras de la funcionalidad operatividad... De tal manera, la sentencia penal*

*hace tránsito a cosa juzgada en lo civil, especialmente cuando se trata de un trámite de responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, debiéndose considerarse los elementos comunes en uno y otro proceso, con lo que se persigue la protección del principio de seguridad jurídica, en tanto que no deben existir decisiones judiciales contradictorias cuando se juzga un mismo hecho, así se base en normas sustantivas de carácter diferente.”.*

Por lo anterior, el juzgamiento con resultados condenatorios que se hizo en el asunto penal, resulta oponible a las presentes, no en cuanto al elemento subjetivo, sino, con más relevancia dados los elementos objeto y causa, máxima cuando las decisiones penales tienen efectos *erga omnes* frente al proceso civil, cuando han sido de condena.

Cordialmente:



JOSE OMAR BOHORQUEZ VIDUEÑAS

Magistrado